

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

En esta causa RUC N° 2000481070-9, RIT N° 44-2021, se dictó sentencia por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la que se condenó a Luis Antonio Aros Huenchullán a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de robo con intimidación, perpetrado en la persona y en perjuicio de C.F.H.T., el 12 de mayo de 2020, en la comuna de Pudahuel, sin costas.

Por la misma sentencia se le absuelve como autor del delito de robo con intimidación por el que se le acusó, respeto del hecho N° 1 contenido en el auto de apertura de juicio oral, de 17 de mayo de 2021.

En contra de la decisión la defensa del sentenciado Aros Huenchullán interpuso recurso de nulidad, que se estimó admisible por este Tribunal y se conoció en la audiencia pública celebrada el veinticuatro de mayo del año en curso, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

Y considerando:

1°) Que la defensa del sentenciado funda la causal principal en la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, denunciando como infringidas las garantías de los artículos 8.2 letra c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 14.3 letra b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la República; y el artículo 270 inciso 1° del Código Procesal Penal, vulnerándose el derecho a defensa y el debido



proceso, fundado en que se agregaron dos víctimas de iniciales I.O.C.C y C.F.H.T. como testigos en el auto de apertura, mediante la corrección de vicios formales de la acusación, no existiendo hipótesis legal que sustente dicha actuación, atendido que su incorporación en el libelo acusatorio es de carácter sustancial y no formal.

Indica que se trata más bien de incorporar medios de prueba nuevos a la acusación en la audiencia de preparación de juicio oral, lo que no pudo preverse por la defensa, puesto que no fueron incorporados en la etapa procesal correspondiente, afectando así su teoría del caso.

Por otro lado, la corrección de vicios formales es una facultad exclusiva del acusado y la defensa, tal como lo indica el artículo 263 del Código Procesal Penal.

Por lo expuesto, estima que las infracciones señaladas fueron sustanciales, desde el momento que el tribunal sustenta su convicción de condena precisamente en la valoración positiva de la declaración de la víctima de iniciales C.F.H.T.

Concluye solicitando se acoja la causal principal formulada, procediendo a declarar la nulidad del juicio oral y de la sentencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda, excluyendo la incorporación del testimonio de la víctima de iniciales C.F.H.T.;

2º) Que la defensa como causal subsidiaria interpone la prevista en el artículo 374 letra e), en relación al artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal, por cuanto la sentencia habría vulnerado el principio de la lógica de la razón suficiente en la fundamentación de los hechos que se dieron por probados, desde que se incurrió en errores en el reconocimiento efectuado por la víctima de iniciales C.F.H.T. en el juicio oral respecto del imputado, como



también en la elaboración del kardex fotográfico durante la investigación y, sin embargo, se efectuó por el tribunal una valoración positiva de la declaración de esa testigo, sin pronunciarse sobre esas dos equivocaciones.

Arguye que, respecto a la misma testigo, se valora positivamente su declaración argumentando que la incidencia de vulneración de garantías fundamentales fue rechazada por el Juzgado de Garantía, por lo que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no puede pronunciarse sobre ello, aunque es el llamado a valorar los medios de prueba que se rindan, por lo que quebranta los principios de la lógica, particularmente el de la razón suficiente.

Termina pidiendo se acoja la causal subsidiaria formulada, procediendo a declarar la nulidad del juicio oral y de la sentencia, se disponga la realización de un nuevo juicio oral, por el tribunal no inhabilitado que corresponda;

3º) Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para acreditar las circunstancias constitutivas de las causales esgrimidas por el recurso, la defensa incorporó como prueba pasajes de los registros de audio de declaraciones prestadas por testigos;

4º) Que el tribunal de la instancia, en el motivo décimo tercero de la sentencia atacada, asentó como hechos probados que *“Que el día 12 de mayo de 2020, aproximadamente a las 11:05 horas, en circunstancias que C.F.H.T , transitaba hacia calle El Pontífice de la comuna de Maipú, se le aproximó el automóvil city car, marca Hyundai, de color azul, sin placas patentes, conducido por un tercero, en el viajaban en el asiento trasero dos mujeres, y como copiloto al lado del conductor el imputado Luis Antonio Aros Huenchullan, el que desciende del móvil y la intimida con una tijera señalándole reiteradamente que entregue su teléfono celular, obligándola a*



pasarle el que llevaba consigo marca Samsung modelo S10, especie que fue recuperada en poder de los imputados en el interior del automóvil”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos de un delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, en relación al artículo 432 del mismo código, en grado consumado;

5°) Que a propósito de la causal principal interpuesta por la defensa del acusado, la sentencia consignó en el motivo noveno *“Que tal incidencia de vulneración de garantías individuales fue rechazado por este tribunal en la deliberación y, por ende, se desestimaré la valoración negativa de la declaración de la víctima que concurrió a la audiencia de juicio oral. El fundamento para ello, es que se trata de una materia resuelta por el tribunal de garantía, en el que quedó preparado el recurso de nulidad, es decir, fallada jurisdiccionalmente sin que exista una posible sorpresa por la defensa o desconocimiento de dicha circunstancia, al agregarse las víctimas al auto de apertura respectivo, puesto que igualmente pudo preparar la defensa de su representado. En consecuencia, no es posible valorar negativamente la declaración de tales víctimas, por tal argumento promovido por la defensa, puesto que ha sido un asunto resuelto por un tribunal distinto, de igual jerarquía, lo que impide modificar tal decisión, debido que al hacerlo se alterarían las reglas de competencia y recursivas, lo que no es posible, al revivir un debate resuelto en la instancia, pues genera la posibilidad de generar una decisión contradictoria. Todo juez debe velar por el respeto a las garantías constitucionales, pero si ello ha sido resuelto en la instancia por uno, no procede que otros, en la misma, lo renueven fundado en los mismos antecedentes, por exceder sus atribuciones”;*



6º) Que al efecto resulta conveniente recordar que dentro de los requisitos de la acusación efectuada por la Fiscalía está, conforme al artículo 259 letra f) del Código Procesal Penal, *“el señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el juicio”, y para el caso que “ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 307, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones”;*

7º) Que también es preciso tener en consideración que el artículo 263 del Código Procesal Penal establece las facultades del acusado, quien podrá, hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, solicitar la corrección de los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación.

A su turno, el artículo 270 del Código Procesal Penal señala: *“Corrección de vicios formales en la audiencia de preparación del juicio oral. Cuando el juez considerare que la acusación del fiscal, la del querellante o la demanda civil adolecen de vicios formales, ordenará que los mismos sean subsanados, sin suspender la audiencia, si ello fuere posible.*

En caso contrario, ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la corrección del procedimiento, el que en ningún caso podrá exceder de cinco días. Transcurrido este plazo, si la acusación del querellante o la demanda civil no hubieren sido rectificadas, se tendrán por no presentadas. Si no lo hubiere sido la acusación del fiscal, a petición de éste, el juez podrá conceder una prórroga hasta por otros cinco días, sin perjuicio de lo cual informará al fiscal regional.



Si el ministerio público no subsanare oportunamente los vicios, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, a menos que existiere querellante particular, que hubiere deducido acusación o se hubiere adherido a la del fiscal. En este caso, el procedimiento continuará sólo con el querellante y el ministerio público no podrá volver a intervenir en el mismo.

La falta de oportuna corrección de los vicios de su acusación importará, para todos los efectos, una grave infracción a los deberes del fiscal”;

8°) Que las normas citadas tienen su justificación, entre otros aspectos, en la prohibición de sorpresa, como mecanismo de interdicción de la indefensión que el recurso al juicio oral, público y contradictorio pretende evitar. Asimismo, ella pretende cautelar la congruencia que debe existir no solo entre acusación y sentencia, sino también entre la primera y la formalización, aspectos todos que dicen relación con el sustrato fáctico de la pretensión de los persecutores;

9°) Que, entonces, resulta necesario tener en consideración para la determinación de los requisitos de procedencia de la hipótesis de nulidad invocada que, según lo asentado por el tribunal *a quo*, las correcciones formales efectuadas por el Ministerio Público decían relación con la incorporación a la acusación de dos testigos, que eran las víctimas de los hechos;

10°) Que en la especie, en la audiencia de preparación de juicio oral el Ministerio Público solicitó incorporar en su acusación dos testigos que correspondían a las víctimas de los hechos que se describían, a través de la correcciones de vicios formales, que la defensa no pidió subsanar tal omisión, interviniente que desconocía la intención de la Fiscalía de presentarlos como medios de prueba, pues no se habían ofrecido en la oportunidad que establece



el código, conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, accediendo el tribunal a dicha corrección.

En este punto cabe tener presente que el código no define en qué consisten los vicios formales, debiendo acudirse a la doctrina para determinarlo. Así para el profesor Tavolari, *“los vicios formales son aquellos que afectan la validez del procedimiento y, por tanto, impiden la generación de una relación procesal válida o, en general, impiden el ejercicio del derecho de defensa”* (Tavolari, Raúl, Instituciones del Nuevo Derecho Proceso Penal, Editorial Jurídica, 2005, p.231).

De la definición señalada se establece que los vicios formales son aquellos que impiden que la relación procesal sea válida o dificultan o imposibilitan el ejercicio del derecho a defensa;

11º) Que de la lectura de la sentencia recurrida, la atribución de participación de Luis Antonio Aros Huenchullán respecto del hecho por el cual fue condenado se establece en el fundamento duodécimo que señala que *“con los dichos de la víctima, unido con la inmediata denuncia efectuada ante carabineros al llegar a su hogar, se confirmó con lo expuesto por los carabineros Román y Ortiz, lo esencial del hecho contenido en la acusación”*, agregando que la ofendida *“señaló que la persona que la intimidó ... era el acusado Luis Antonio Aros Huenchullán”*, para posteriormente afirmar que *“la citada víctima, señaló las vestimentas (sic) que usaba la persona que la intimidó, concordando al respecto su declaración con la ropa que usaba el acusado ese día con las fotografías acompañadas, reconociendo al acusado, además, durante la investigación y en la audiencia de juicio”*.

También debe tenerse presente que respecto al otro hecho por el que fue acusado el imputado, el tribunal lo absolvió según se expresa en el



basamento undécimo porque *“No concurrió al juicio la afectada I.O.C.C. ni se han reconocido las especies recuperadas como suyas, ni aun en la investigación reconoció al acusado, siendo insuficiente lo escuchado de ella por los policías Ortiz y Román que declararon en el juicio, para corroborar cómo ocurrieron estos hechos”*, víctima que corresponde al otro testigo que el Ministerio Público incorporó a su acusación en la audiencia de preparación de juicio oral como vicio formal;

12°) Que del análisis detenido de la sentencia, en especial de las secciones reproducidas precedentemente, se pone de manifiesto que la atribución de autoría realizada al imputado en el hecho por el cual fue condenado, fue fundada principalmente por la declaración de la víctima, que es uno de los testigos incorporados por la Fiscalía a la acusación en la audiencia de preparación de juicio oral como vicio formal, pues lo omitió al indicar los medios de prueba de los que se iba valer en el juicio oral, incumpliendo el requisito establecido en la letra f) del artículo 259 del Código Procesal Penal, tratando de subsanar tal error de una manera no prevista por el ordenamiento jurídico, cercenando, finalmente, el derecho de defensa de que es titular todo inculpado de un delito.

En efecto, según se desprende de lo razonado por los sentenciadores al acusado se le atribuye la calidad de autor en los hechos por los que fue condenado por haber sido reconocido por la víctima, quien relató la forma en que acontecieron los hechos e identificó la especie sustraída y recuperada por los funcionarios policiales.

Por otra parte, los mismos sentenciadores absuelven al acusado de otro hecho, fundado, precisamente, en la ausencia de la otra víctima, que



corresponde al segundo testigo incorporado por el Ministerio Público a su acusación en la audiencia de preparación de juicio oral.

En consecuencia, la incorporación de esos dos testigos a la acusación en una etapa procesal posterior a la prevista por el legislador, permitió la declaración de uno de ellos en el juicio oral, resultando determinante para efectos de atribuirle responsabilidad como autor al acusado en uno de los hechos, no obstante que el ofrecimiento de prueba por el Ministerio Público lo realizó en forma extemporánea en la audiencia de preparación de juicio oral.

Todo aquello significó una sorpresa para el recurrente, pues constituye un dato de relevancia que el imputado y su defensa no pudieron enfrentar probatoriamente en el proceso, mediante la facultad de refutación y ejercicio de la prueba, lo que afectó su estrategia del caso y lesionó su derecho a defensa;

13°) Que, en lo que concierne al recurso de nulidad impetrado, debe tenerse en consideración que ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una solución de ineficacia de todos aquellos actos en que se hubieren violentado sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes - artículo 373, letra a), o cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una inexacta aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo - artículo 373, letra b), o, se expida la decisión con la concurrencia de alguno de los motivos absolutos de nulidad reglados en el artículo 374 de la ley.



Sobre el particular esta Corte ha sostenido que el recurso de nulidad está regido por los mismos principios y reglas generales que gobiernan la nulidad procesal, por consiguiente, para su procedencia deben concurrir sus presupuestos básicos, entre los cuales se encuentra el llamado “principio de trascendencia” que, por lo demás, recoge el artículo 375 del Código Procesal Penal, en virtud del cual la trasgresión que sustente un recurso de la naturaleza como el de la especie, debe constituir un atentado de entidad tal que importe un perjuicio al litigante afectado que se traduzca en un resultado lesivo para sus intereses en la decisión del asunto, desde que exige que el defecto denunciado tenga influencia en la parte resolutive del fallo (SCS Roles Nos 12.885-15 de 13 de octubre de 2015 y 5363-16 de 03 de marzo de 2016). Así, se ha resuelto también que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso y, en el caso sub judice, el derecho a defensa (SSCS Rol N° 2866-2013 de 17 de junio de 2013, Rol N° 4909-2013 de 17 de septiembre de 2013, Rol N° 4554-14 de 10 de abril de 2014 y Rol N° 6298-15 de 23 de junio de 2015).

Esa sustancialidad no dice relación con lo resolutive del fallo, ya que ello en la especie obligaría a ponderar prueba para verificar una eventual y diversa conclusión fáctica, sino con la entidad o dimensión de la vulneración de que trate. La situación es similar a los motivos absolutos: no se precisa demostrar perjuicio - porque se le presume cuando se trata de esta clase de infracciones- ni incidencia en lo resolutive, pero debe constatar que se trata de una infracción relevante de los derechos o garantías establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.



No se trata simplemente de establecer que el delito fue ejecutado por Luis Antonio Aros Huenchullán como autor del robo con intimidación que afectó a la víctima de iniciales C.F.H.T. el 12 de mayo de 2020, sino que va más allá, pues lo relevante es determinar cómo la incorporación de la afectada como testigo en la acusación en la audiencia de preparación de juicio oral, permite acreditar la participación del acusado en el ilícito.

En efecto, si la estrategia defensiva se construye sobre la premisa que el Ministerio Público no va a rendir como prueba el testimonio de la víctima, pues omite señalarla en la acusación presentada en la oportunidad indicada en el artículo 248 del Código Procesal Penal, para luego incorporarla alegando un vicio formal en la audiencia de preparación de juicio oral, impiden al imputado y su defensor enfrentar y cuestionar probatoriamente dicha alteración, lo que transgrede, en definitiva, el derecho a defensa, requisito sine qua non para asegurar un procedimiento justo en los términos del artículo 19, N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República;

14°) Que, según todo lo expuesto, el vicio denunciado por la defensa del acusado aparece pues revestido de la relevancia necesaria para acoger el remedio procesal, sustentado en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal;

15°) Que, por haberse acogido la causal principal, no se emitirá pronunciamiento sobre la causal subsidiaria de nulidad impetrada por la defensa.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 a), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se acoge** el recurso de nulidad deducido en favor de Luis Antonio Aros Huenchullán y en consecuencia, se invalidan la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y el juicio oral que le antecedió en



la causa RIT N° 44-2021, RUC N° 2000481070-9 del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece el procedimiento al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura el testimonio de la víctima de iniciales C.F.H.T., ofrecido por el Ministerio Público.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

N° 69.753-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

